

# UN ASESINO EN EL ESPEJO<sup>1</sup>

*Una joven escritora colombiana se atreve a poner en tela de juicio las marchas contra las Farc realizadas el año pasado. Con argumentos, y bases históricas, Carol Ann Figueroa plantea una lectura crítica de varios sucesos de la historia reciente. Ella ganó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2008 con su crónica <Una cretina llamada Elisa>, publicada en revista Número edición 55.*

Por Carol Ann Figueroa

Un año después de nadar contra la corriente del río de colombianos que inundó las calles de 183 ciudades del mundo, todavía siento la angustia que me produjo ver aquellas banderitas blancas flotando sobre un violento cauce que, por décadas, no había pasado de ser una insignificante quebrada.

<sup>1</sup> Revista Número, Edición 60, 2009. p. 56-63

Pese a que los responsables de las tomas aéreas alardeaban con la mancha de camisetas que se apretaban en el asfalto y tanto los organizadores como los medios hacían de esos catorce millones de colombianos<sup>2</sup> la prueba irrefutable de un acuerdo nacional, aquel río representaba algo así como el 20% del total de la población, porcentaje equivalente al número de colombianos en cuyas manos se concentra el 52% de nuestras riquezas, manteniéndonos en el “selecto” grupo de los tres países más inequitativos de América Latina.

¿Quiénes eran esos que decían “Colombia soy yo” y se sentían unidos por gritar “No más Farc” con la misma euforia con que celebraron aquel lejano 5-0?

Colombianos entre los veinte y los cincuenta años que, durante 72 meses del cautiverio de Ingrid Betancourt, habían hecho de la especulación sobre su muerte, o su vida amorosa en la selva, un chiste recurrente después del almuerzo.

Los mismos colombianos que no gritaron nada frente al secuestro de los diputados del Valle y que en realidad no se sorprendieron tanto cuando el final de la historia fue su muerte.

Colombianos que en 1999 vieron al presidente Andrés Pastrana esperando a Tirofijo en el Caguán y no dijeron nada cuando la silla destinada al jefe guerrillero quedó vacía.

Los mismos colombianos que vieron el asesinato de Jaime Garzón y escucharon sin estremecerse que los responsables eran las autodefensas, y que tampoco se estremecieron al escuchar –de labios del mismo Garzón, entre otros- que las

<sup>2</sup> “El personaje del año” [www.colombiaso.org](http://www.colombiaso.org)

autodefensas eran el tercer hijo del actual presidente de la república, Álvaro Uribe Vélez.

Los colombianos que se enorgullecían al pedir paz con la misma fiereza con que un niño le exige un caramelo a su padre en la tienda fueron los mismos que en 1990 vieron morir a Carlos Pizarro apenas a un mes de haber entregado las armas, así como en 1984 vieron a las Farc firmar un acuerdo de paz con el presidente Belisario Betancur y convertirse en un partido político llamado la Unión Patriótica (UP), el cual desaparecería por cuenta de un genocidio que alcanzó a más de tres mil de sus militantes y simpatizantes<sup>3</sup>, al igual que a dos candidatos presidenciales con notable apoyo popular: Bernardo Jaramillo Ossa y Jaime Pardo Leal.

---

<sup>3</sup> La cifra oscila entre 3.000 y 5.000 según las fuentes. En 1993 la Dirección Nacional de la UP, la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas denunciaron ante la comisión interamericana de Derechos Humanos 1.163 casos de persecución entre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones ejecutadas en el periodo 1985-1993. En el documental *El Baile Rojo*, realizado en el 2003, la directora de la Corporación Reiniciar, Jahel Quiroga afirma que la cifra asciende a 3.000 para ese entonces, pero que va en aumento. Diferentes publicaciones en la web, como Prensa de Frente ([www.prensadefrente.org](http://www.prensadefrente.org)), profesionales del Partido Comunista de Madrid ([www.profesionalespcm.org](http://www.profesionalespcm.org)) y Redacción Popular ([www.redaccionpopular.org](http://www.redaccionpopular.org)) hablan de 5000. Denuncias recientes hechas por la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas señalan que durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez han sido asesinados 136 miembros de la Unión Patriótica y el Partido Comunista colombiano, otros 38 han desaparecido y 28 más sobrevivieron a atentados personales. En noviembre de 2008 la Organización Mundial Contra la Tortura denunció amenazas de muerte realizadas a Jahel Quiroga, así como a otros miembros de la Corporación Reiniciar.

Los colombianos, que durante treinta años habían sido testigos de todo esto sin demostrar sentirse parte del asunto –acaso porque Facebook se hizo popular apenas en el 2007- de repente estaban indignadísimos y exigían que les regresaran un país en paz, como si estuvieran preparados para sostenerlo.

El sonido de sus arengas todavía me retumban los oídos y aún no salgo de mi desconcierto. Cuando decían “No más Farc, queremos la paz”, ¿qué estaban pidiendo?

Si era la paz que define el derecho internacional, entonces pedían un convenio que pusiera fin a la guerra, de modo que se lograra un entendimiento entre los grupos o estamentos que componen la sociedad colombiana.

Entonces no, no pedían eso.

Pedían –sin proponer nada a cambio- que un estamento social colombiano, que esta a punto de cumplir cincuenta años de no llegar a un convenio con otros estamentos y que llegó a ejercer control territorial en 24 de los 32 departamentos de Colombia; cuyo número de miembros armados y entrenados oscila entre los seis mil y nueve mil<sup>4</sup>, supiera que al 20% de los colombianos les parece que ellos no son el ejército del pueblo y que por eso deben dejar de existir.

---

<sup>4</sup> “La guerrilla de las Farc ha perdido la mitad de sus integrantes y tiene actualmente entre 6.000 y 8.000 combatientes. Santos señaló que las Farc ya no tienen lo cerca de 17.000 hombres que se calculaba en 2002, cuando se inició el primer mandato de Uribe, reelegido en 2006”. [www.elpais.com](http://www.elpais.com) enero de 2008. “The group had about 16.000 fighters in 2001, according to the Colombian government, but some reports suggest their numbers are now down to about 9,000”. <http://news.bbc.co.uk/juliod2008>.

En la marcha del 4 de febrero se pedía que el reflejo del país desapareciera, sin que nadie tuviera que dar un paso fuera del espejo.

Nadie habría usado una camiseta que dijera “Las Farc soy yo”, porque además de arriesgarse a morir linchado por el histórico río de la paz, nadie se consideraba cómplice de los once años de cautiverio de Pablo Emilio Moncayo o del lavado de los US\$7 millones que según el exjefe de las autodefensas, Salvatore Mancuso, ingresan anualmente a la economía del país por cuenta de la producción y tráfico de cocaína.

Nadie quiere levantarse y encontrar un asesino en el espejo. Es más fácil ponerse el vestido blanco de la novia que hace años fue desvirgada y salir a la calle a caminar.

Colombia es el único país de Latinoamérica que entre 1964 y 1974 vio nacer cuatro organizaciones guerrilleras<sup>5</sup>, más de las que ningún otro país de la región produjo en una misma década. ¿No es de una candidez vergonzosa pensar que el fin de la paz comenzó con ellas?

A las guerrillas, como a los niños no las traen las cigüeñas desde París, y en la cronología de las guerrillas colombianas todo comienza con penetraciones violentas.

**CAROL ANN FIGUEROA** (Bogotá, 1978).

Periodista de profesión, escritora por necesidad, guionista por mutación, redactora de libros de investigación y del desaparecido periódico cultural *Suburbia*; ha colaborado en varias publicaciones, entre las que se destacan el “Magazín Dominical” de *El Espectador*, y las revistas *Número* y *Kinetoscopio*.

La primera de ellas sucedió hace 48 años, en una pequeña zona de la cordillera entre Tolima y Huila conocida como el cañón de las hermosas, pero que según cuenta la leyenda sus habitantes la bautizaron Marquetalia en honor del pueblo de Caldas en el que había crecido uno de sus líderes.

El lugar que muy pocos sabrían señalar en el mapa, era desde 1955 un refugio de campesinos liberales que tras enfrentar la brutalidad de la violencia desatada por el 9 de abril habían tenido que escoger entre ser autodefensas campesinas dedicadas a labores comunitarias, o autodefensas armadas dedicadas a enfrentar a las milicias conservadoras, dado que la amnistía ofrecida en 1953 por el general Rojas Pinilla sólo había servido para que ambos bandos vieran morir fusilados a sus compañeros.

En 1961, en un momento en que el gobierno de Estados Unidos expandía su lucha anticomunista y los habitantes de Marquetalia se definían como un movimiento de trabajadores agrícolas, el Congreso de Colombia era escenario de indignados discursos en los que se definía a Marquetalia, junto a otras zonas del Pato y Sumapaz, como “repúblicas independientes” que escapaban al control del Estado y amenazaban con fecundar el germen comunista. Dicho esto, pasaron un par de años durante los cuales los miembros del Estado miraron a Marquetalia con ganas de hacerla suya, hasta

---

<sup>5</sup> Las Fuerza Armadas Revolucionarios de Colombia (Farc) nacieron el 27 de mayo de 1964; en julio del mismo año se creó el Ejército de Liberación Nacional (ELN); el Ejército Popular de Liberación (EPL) se fundó en 1965 y el Movimiento 19 de Abril (M-19) en 1974.

que el segundo presidente del Frente Nacional, el conservador Guillermo León Valencia, se decidió a penetrarla violentamente, convirtiéndose así, en el padre de las Farc.

Dos mil soldados cercaron y bombardearon a los 48 campesinos que en 1964 habitaban Marquetalia y que, según declararía su líder más adelante<sup>6</sup>, no tenían aspiración política alguna más allá de la convicción de defender su derecho a la tierra, sin importar el color de su oponente.

Cuentan quienes conocen la leyenda, que no fueron dos mil soldados sino dieciséis mil los que se enfrentaron contra doscientos cincuenta campesinos, que la parafernalia militar la habría financiado Estado Unidos y que la misión, que pretendía ser una operación relámpago, se extendió durante casi un mes, en el que bombardearon la zona indiscriminadamente.

Pese a la desigualdad del combate, los campesinos evadieron el espectacular cerco sin sufrir ninguna baja entre sus filas, por lo que los llamaron los héroes marquetalianos; que desde entonces serían una guerrilla móvil liderada por Pedro Antonio Marín, el finado Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo.

Mientras un grupo de intelectuales, encabezados por Jean-Paul Sartre, rechazaba la agresión y el Partido Comunista protestaba en las principales ciudades, ganando un brazo armado casi por accidente, el Estado Colombiano Izaba solemnemente la bandera como prueba de haber recuperado el control territorial del cañón de las Hermosas.

---

<sup>6</sup> Entrevista con Manuel Marulanda Vélez. *50 años de monte*, documental. Dir. Yves Billon, 1999.

¿Qué habrá sucedido en la zona luego que el Estado recuperara el control territorial, si a la vuelta de 44 años el ejército tuvo que lanzarse nuevamente a la conquista de las mismas tierras?<sup>7</sup>

¿Qué estaba prometiendo el presidente Álvaro Uribe el día en que, durante un consejo comunitario, aseguró que en San José de las Hermosas<sup>8</sup> se iba a izar la bandera nacional, cuando a siete años de que Pastrana la izara en la plaza “recuperada” de San Vicente del Caguán, el municipio continúa siendo un lugar sin calles pavimentadas ni desarrollo social visible, gobernado por una tensa calma a cargo del ejército y la guerrilla?

Al parecer, cuando el Estado colombiano se refiere a recuperar el control territorial, habla de realizar espectaculares ejercicios de ocupación que, más allá de los enfrentamientos violentos, no se traducen en acciones concretas que conduzcan al desarrollo sostenible de las poblaciones a las cuales les exige un sentimiento soberano.

Como buen semental que es, este Estado ha regado sus hijos por todo el país, penetrando cuanta tierra le ha parecido fértil y corriendo a la primera señal de gravidez.

---

<sup>7</sup> “El comandante de la Sexta Brigada, con sede en Ibagué, coronel Asmeth Castillo, confirmó que en los últimos diecisiete días se ha desarrollado la Operación Fuerte con la dirección del presidente Álvaro Uribe, con la que se pretende recuperar la zona donde por más de cuarenta años las Farc se movilizaban hacia Huila, Cauca, Caquetá y Valle del Cauca”. *Ofensiva Militar del sur del Tolima*, revista *Semana*, 15 de febrero de 2008.

<sup>8</sup> “Dentro de pocos días –con la ayuda de Dios–, en San José de las Hermosas (...) haremos que flamee allí, ondulante y victoriosa, la bandera de la patria en señal de que hemos recuperado la libertad de las gentes del sur del Tolima” *Ibid.*

Primero fue el cañón de las hermosas, en medio del Huila y el Tolima; luego la sierra de la Macarena, la Uribe y Guayabero, en el Meta, seguidos por Riochiquito en el Cauca; tres esquinas, El Doncello y San Vicente del Caguán, en Caquetá, y así sucesivamente hasta sumar los veinticuatro departamentos que en uno u otro momento de esta historia han convivido con la guerrilla, y de los cuales el Caquetá es uno de los principales protagonistas.

¿Quiénes eran esos que en la ceremonia inaugural de los diálogos e paz con Pastrana patrullaban San Vicente del Caguán; esos que aplaudieron en 1984 la unificación de nuestras guerrillas en la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y gritaron “Viva Colombia” antes de romper filas; esos colombianos a quiénes el río de la paz quería hacer desaparecer?

Colombianos que nacieron mucho antes que los campesinos del Huila y el Tolima que salieron de sus tierras convertidos en agricultores armados, y que de Marquetalia salieron convertidos en guerrilla.

Familias de colonos que en 1850 perdieron sus tierras cuando el Estado decidió hacer de la quina su pasaporte al mercado internacional, conquistando las tierras aptas para este cultivo por medio de un sistema que titulaba tierras baldías a empresarios y hacendados, prometiendo que así las zonas desaprovechadas se convertirían en poblaciones productivas que pagarían impuestos al Estado, fortalecerían nuestras

exportaciones y recibirían a cambio obras sociales y públicas que las harían crecer sanas y prósperas.

La fisura del sistema, que en realidad era una grieta bastante visible, consistía en que los llamados terrenos baldíos no sólo no estaban vacíos, sino que eran productivos gracias al trabajo de miles de campesinos, indígenas y afrocolombianos que se alimentaban de ellos, y que fueron violentamente obligados a dejar sus tierras.

La grieta, cada vez más grande y notoria ante los ojos del Estado, los desplazados y los pacíficos marchantes del 4 de febrero, le permite a un selecto grupo de empresarios incorporar a los colombianos en un sistema productivo del cual no pueden adueñarse y que, pese a nutrirse de sus tierras y su trabajo, los obliga a ver las ganancias siempre desde abajo, con la mirada agradecida de un peón que sobrevive con un sueldo miserable.

En 1883, cuando las plantaciones de quina comenzaron a crecer en el sureste asiático y los precios se vinieron a pique, los contratistas emigraron y las poblaciones de Puerto Rico, San Vicente y Guacamayas prácticamente desaparecieron bajo el control territorial del Estado.

Baldío para añil va, baldío para cacao viene; baldío para maderas, para ganadería, para café, para petróleo y cuanto producto prometía conquistar el mercado internacional, produjeron sucesivos éxodos de familias de Antioquia, Cundinamarca y Santander, que llegaron al Caquetá a comienzos del siglo XX, buscando su recomposición

campesina en la explotación de caucho, la promesa económica del momento.

La salvaje y desconsiderada selva pronto convirtió a los colonos en mano de obra poco rentable y a las comunidades indígenas de la zona en la mano de obra ideal, pues no sólo conocían el terreno sino que resultaban fáciles de esclavizar tanto por los caucheros colombianos como para los peruanos, quienes no tuvieron ningún problema con el control territorial del Estado a la hora de cruzar fronteras.

Las condiciones no podían mejores: la tierra estaba generosamente sembrada de caucho, la mano de obra se encontraba disponible y ni siquiera tenían que pagarle, y no hacía falta abrir nuevas trochas para transportar el caucho, pues para eso estaban las dejadas por la explotación de quina.

Mientras Caquetá y Putumayo seguían bajo el control territorial del Estado y unos treinta mil indígenas andoques y huitotos morían víctimas del brutal sometimiento sólo un incidente le hizo pensar al Estado que quizás no era tan cierto eso de que tenía el control.

En 1932, un grupo de caucheros peruanos que se disputaban el control del negocio con los caucheros colombianos promovió una invasión a Leticia, y entonces ahí sí se armó la grande. “Ah, no, ¡ese caramelito es mío!”, gritó el Estado colombiano.

Haciendo gala de su capacidad para ejercer el control territorial, respondió a la agresión dotando a la zona de una pequeña infraestructura de guerra: instaló cuarteles en Florencia y Venecia, una base naval en Leguizamo y otra aérea

en Tres Esquinas; construyó un puente sobre la quebrada La Perdiz y la carretera Garzón-Florencia-Venecia; además, conectó la zona con Nariño mediante la construcción de la carretera Pasto-Mocoa y con el Huila por medio de la carretera Altamira-Florencia.

Así, Caquetá y Putumayo consiguieron más obras públicas durante los dos años en que el Estado debió admitir que no tenía el control territorial, que durante los cincuenta años en que bajo su control la población había sido humillada, so pretexto de ser insertada en un mercado internacional al que nunca lograba acceder.

En las décadas de los treinta y cuarenta, el turno fue para los latifundios del Huila y el Tolima, que empujaron a la población hacía el Meta. Allí, la formación de la hacienda Larandía –que llegó a tener veintiocho mil hectáreas dedicadas a la ganadería y ahora es una base militar– los desplazó hacía el Caquetá, donde a su vez se encontraron con un campamento de la Texas Petroleum Company que los acogió como peones y consolidó una población llamada Solita que, al marcharse la petrolera, quedó igualita a su nombre y al borde de la extinción.

A los combatientes que nutrían la filas de las guerrillas colombianas los habían reclutado mucho antes de la toma del cañón de las Hermosas y el suelo del Caquetá lo habían abonado esmeradamente para cultivar coca.

Las condiciones no podían ser mejores, las tierras que no estaban tituladas a nombre de ningún hacendado o empresario no eran aptas para la agricultura tradicional, pero sí lo eran para

el cultivo de coca; no hacía falta abrir nuevas trochas para transportar el producto, pues para eso estaban las dejadas por la quina y el caucho, y una población con décadas de desplazamientos y penetraciones violentas encima estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para poner a producir sus tierras.

Bastó con que los empresarios de turno repartieran personalmente las semillas para que un Estado paralelo, nutrido de colombianos huérfanos, llegara al Caquetá a ejercer el control territorial, y mediante una alianza con los empresarios cocaleros pusiera en marcha una poderosa economía paralela, que le permitió conquistar en apenas una década el mercado internacional que el Estado oficial apenas había acariciado durante más de un siglo.

Con dos millones de hectáreas cubiertas de ganado, seis mil de caucho y treinta mil de coca, el departamento de Caquetá, llamado oasis de paz a principios de los años setenta al recibir a los campesinos desplazados por la violencia del interior, y que se convirtió en el Vietnam suramericano a finales de esta década cuando empezaron los enfrentamientos entre las Farc, el M-19 y el ejército, actualmente es considerado el centro de operaciones de la guerrilla más antigua de Latinoamérica y, por tanto, objetivo principal del plan patriota desarrollado con el apoyo del gobierno estadounidense para recuperar el control territorial que, al parecer, tanto le cuesta ejercer al Estado colombiano.

¿Qué clase de marcha era esa que pretendía cambiar la historia, cuando su incapacidad para acoger a unos cuatro millones de colombianos desplazados<sup>9</sup> sin camisetas resultaba tan obvia en las tomas aéreas?

Una marcha cuyas fotografías acaparaban las primeras planas, mientras las páginas interiores contaban la historia de un ministro de Agricultura que en pleno siglo XXI decidía entregar a empresarios palmeros y caucheros catorce mil hectáreas de terrenos que, a pesar de haber sido prometidos a familias desplazadas, ahora lucían demasiado jugosos como para entregarlos a colombianos que pese a haber trabajado la tierra toda su vida, parecían incapaces de hacerla producir ante los ojos del ministerio.

Andrés Felipe Arias, el entonces ministro de agricultura a quien tan bien le sentaba la camiseta blanca el día de la marcha, diría en una entrevista que no les había entregado Carimagua a los desplazados, como se había acordado hacía tres años, porque “sacarle recursos a ese predio genera más recursos que entregárselo a desplazados”<sup>10</sup>.

¿Qué estaba diciendo Arias cuando en la misma entrevista aseguró que en Carimagua “cabían ochenta familias y con darle once hectáreas a cada una no se hace nada”, en contraposición a visiones más optimistas según las cuales “con diez hectáreas

---

<sup>9</sup>“Mientras Codhes estima que hay unos cuatro millones de desplazados en Colombia, Acción Social reporta que tiene inscritas a 2,6 millones de personas”. 30 de septiembre de 2008. <http://news.bbc.co.uk>.

<sup>10</sup> “Sacarle más recursos a Carimagua dará más recursos a desplazados: Minagricultura”. *El Tiempo*, 10 de febrero de 2008.

sembradas, el campesino puede tener una ganancia anual de 16 millones”<sup>11</sup>?

Las penetraciones que sacaron a escopetazos a la cigüeña de ese cuento escriben el epílogo de nuestra cíclica historia.

Colombia es el quinto productor mundial de palma africana, después de Malasia, Indonesia, Nigeria y Tailandia, países con los que comparte, además de un clima idóneo, condiciones tan particulares como disponer de vastas extensiones de terrenos baldíos o poco protegidos por la legalidad territorial, tener o haber tenido movimientos de guerrilla o cultivos ilícitos, y contar con una mano de obra barata y poco protegida en sus derechos laborales y sindicales<sup>12</sup>.

Las tierras más aptas para cultivar palma africana en nuestro país se encuentran en el Magdalena, norte del Cesar, Atlántico, La Guajira, Santander, Norte de Santander, sur del Cesar, Bolívar, Meta, Caquetá, Nariño y Chocó, departamentos que comparten en el ámbito local las características que comparten los países productores globalmente.

De la importancia de Caquetá en esta historia ya hemos dado cuenta; del Meta destacaremos que es el hogar de Carimagua, y del Chocó tomaremos dos nuevos personajes, Jiguamiandó y Curbaradó, poblaciones que casi ningún colombiano sabría

---

<sup>11</sup> Paula Cristina Pérez para *El Colombiano*, “Retorno con la palma africana”, especial Regiones Antioqueñas 2003 (ver Urabá/Mutatá). “El cultivo de la palma africana en el Chocó”, Human Right Everywhere – Diócesis de Quibdó, p.49. Texto completo disponible en <http://www.hr-everywhere.org>.

<sup>12</sup> *Ibid.*, p. 34.

señalar en el mapa y que permanecen en tal grado de abandono que hasta 1997 ni siquiera el conflicto armado se había fijado en ellas, hasta el punto de que su historial subversivo era bastante pobre. Pese a esto, el 24 de febrero de ese año, la brigada XVII del ejército colombiano dio inicio a la operación Génesis, durante la cual se hicieron bombardeos aéreos de manera indiscriminada, so pretexto de atacar al frente 57 de las Farc.

Cuentan quienes conocen la historia que los bombardeos se extendieron sobre amplias zonas de las cuencas de los ríos Salaquí y Cacarica, y que la operación que duraría tres días se ha extendido durante más de nueve años, produciendo uno de los mayores desplazamientos forzados vistos en el Chocó<sup>13</sup>, así como un “largo etcétera de tomas, bombardeos, masacres, desapariciones forzadas (...) retenes legales e ilegales, asesinatos, amenazas, secuestros, quemas de bienes, robos (...) bloqueo económico y de movilidad, ataques a la identidad cultural (...) en fin, un panorama muy desolador”<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> “Más de cuatro mil afrocolombianos desplazados, 85 víctimas de tortura, desaparición forzada, entre otras violaciones a los derechos humanos, ha sido el resultado parcial de la acción estatal de muerte, destrucción y desarraigo, que empezó hace diez años en las cuencas de los ríos Cacarica, Salaquí y Truandó, en una operación militar y paramilitar liderada por el general Rito Alejo del Río, conocida como Operación Génesis”. A diez años de la Operación Génesis, 16 de febrero de 2007. [www.indymedia.org](http://www.indymedia.org)

<sup>14</sup> “El cultivo de la palma africana en el Chocó”, Human Right Everywhere – Diócesis de Quibdó, p. 88. Texto completo disponible en <http://www.hr-everywhere.org>.

Apenas cuatro años atrás se promulgaba la Ley 70 de 1993, mediante la cual dichos territorios se entregaron a las comunidades afrodescendientes bajo la figura de títulos colectivos que convierten sus predios en territorios inalienables, imprescriptibles e inembargables, sobre los cuales la comunidad tiene el derecho a ejercer control y el deber de organizarse en consejos comunitarios, creados a razón de uno por cada título expedido. Amparados en esta premisa legal, a mediados del año 2001 los habitantes de Jiguamiandó y Curbaradó decidieron regresar, pese al terror con el que dejaron la zona.

Sus viviendas estaban destruidas, sus tierras cubiertas de palma de cera y sus propiedades tituladas a nombre de Urapalma<sup>15</sup>, Palmado, Pulmura y Agripalma, entre otras empresas, que pese a su importancia, no se dieron cuenta que estaban sembrando palma en territorios que legalmente pertenecen a las comunidades de Curbaradó y Jiguamiandó.

Desde entonces, la comunidad ejerce resistencia pacífica agrupada en zonas humanitarias claramente delimitadas, a las

---

<sup>15</sup> Documentos publicados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la defensoría del pueblo señalan que “desde el año 2001 la empresa Urapalma S.A. ha promovido la siembra de palma aceitera en aproximadamente 1.500 hectáreas de la zona del territorio colectivo de estas comunidades, con ayuda de la protección armada perimetral y concéntrica de la Brigada XVII del ejército y de civiles armados en sus factorías y bancos de semillas”. “Explotación de madera en el Bajo Atrato – Amicus Curiae”, informe de la Defensoría del Pueblo, p. 53. “El cultivo de la palma africana en el Chocó”, Human Right Everywhere – Diócesis de Quibdó, p. 130.

cuales está prohibido el ingreso de armas y que con nombres como Pueblo Nuevo, Bella Flor y Nueva Esperanza, han presentado denuncias públicas sobre el avance de los cultivos ilegales de palma en la zona<sup>16</sup>, al tiempo que con el apoyo de representantes de diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado decenas de amenazas y atentados de las que son víctimas constantemente, so pretexto de ser señalados como subversivos.

En febrero de 2008, en un momento en que el gobierno de Estados Unidos continuaba apoyando el Plan Patriota para acabar con la guerrillas y la corte Interamericana de Derechos Humanos reiteraba al Estado colombiano que adoptara medidas para proteger la vida de los miembros del Consejo Comunitario del Jiguamiandó y las familias de Curbaradó, con el fin de asegurar que puedan seguir viviendo en las localidades que habitan<sup>17</sup>, el asesor presidencial José Obdulio Gaviria declaraba que el gobierno no participaría de una marcha contra

---

<sup>16</sup> “En el territorio que forma parte del título colectivo de la cuenca del Curbaradó, municipio del Carmen del Darién (...) continúan adelantando la siembra de cerca de 1.500 hectáreas de palma aceitera en predios pertenecientes a los afrodescendientes que se encuentran desplazados en las riberas del río Jiguamiandó”. Informe ejecutivo 4 del 9 de octubre del 2002, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Tomado del informe “El cultivo de la palma africana en el Chocó”, Human Right Everywhere – Diócesis de Quibdó, p. 128.

<sup>17</sup> Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 5 de febrero de 2008. Medidas provisionales respecto de la república de Colombia. Asunto comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó, p. 8.

el paramilitarismo porque, según su criterio, ésta estaría convocada por la guerrilla<sup>18</sup>.

Las condiciones para que Colombia apueste por convertirse en una potencia exportadora de biocombustibles no pueden ser mejores. En un informe de la ONG Human Rights Everywhere acerca de los cultivos de palma africana en el Chocó se establece que “para aumentar la rentabilidad de los cultivos de palma, muchas empresas han empleado método que bajo muchos puntos de vista poco respeto tienen de la legalidad. En este ámbito, es imprescindible anotar que en algunos casos se puede hablar de graves omisiones por parte del Estado en su obligación de controlar el comportamiento de las empresas en la implementación de las palmeras” y que dichas omisiones pueden calificarse como violación de derechos humanos. A finales del 2008, mientras que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Acnur) afirmaba que la cantidad de tierras arrebatadas violentamente a los colombianos sumaba seis millones de hectáreas, Andrés Felipe Arias cerraba su informe de rendición de cuentas asegurando que “nuestra gran ventaja es la enorme cantidad de tierra que tenemos disponible para sembrar de todo”.

Tierras tituladas a nombre de empresarios y hacendados, con capacidad de generar los recursos suficientes para emplear a familias enteras de desplazados que se convertirán en poblaciones cuyo trabajo fortalecerá nuestras exportaciones y

---

<sup>18</sup> “El gobierno de Uribe rechaza una marcha contra paramilitares” [www.elpais.com](http://www.elpais.com) Febrero de 2008.

por el cual recibirán a cambio obras sociales y públicas que las harían crecer sanar y prosperas.

Un año después de que las fotografías del río de la paz restaran notoriedad al escándalo desatado en torno a la responsabilidad del ministerio de Agricultura en las irregularidades cometidas en Carimagua, Andrés Felipe Arias renuncia a su cargo para aspirar a “tener el honor de suceder a quien partió en dos la historia del país”<sup>19</sup>, mientras los habitantes de Jiguamiandó y Curbaradó denuncian una militarización sin precedentes de sus territorios, orientada a apoyar la exploración del cerro Cara de Perro por parte de la empresa estadounidense Muriel Mining Corporation, la cual se realiza sin su consentimiento.

Cuando un colombiano luce ante el espejo una camiseta que le grita al mundo “Colombia soy yo”, ¿Qué le dice su reflejo?

---

<sup>19</sup> “Inicio carrera hacia la presidencia: Arias” [www.lanacion.com.co](http://www.lanacion.com.co) febrero de 2009.